

OTRAS FACES DEL LEVIATÁN: UNA DISCUSIÓN SOBRE LA ECONOMÍA POLÍTICA DEL ENCARCELAMIENTO EN MÉXICO¹

Autora: Sara Conceição de Paula

Observatório Econômico y Social del Turismo,
OEST, Universidade Federal de Juiz de Fora,
Brasil.
Correo: sara.angrense@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5712-7561>

Resumen: A partir de una revisión bibliográfica y documental, el objetivo del artículo es proponer una discusión en torno del escenario latinoamericano de la ola punitiva caracterizando el repunte penal en México. Delante de la materialidad simbólica del Estado punitivo donde se figa a la responsabilidad individual estricta como característica ideológica (neo)liberal, el artículo relaciona los cambios del valor social atribuido a la fuerza de trabajo frente a las transformaciones en el sistema de producción capitalista. Fue observado que, aunque las tasas de encarcelamiento en México sean comparativamente bajas, es necesario considerar otros elementos de configuración y disciplina de la fuerza de trabajo utilizados como la contención (segregación) y el exterminio. El Estado Penal Mexicano ha sostenido la legitimación de un mando coercitivo centralizado conformando así, en términos hobbesianos, el camino para el leviatán con una soberanía absoluta, un poder indivisible, un enorme aparato represor y, sobre todo, el control ideológico.

Palabras claves: Encarcelamiento, Punición, Precariedad laboral.

Resumo: A partir de uma revisão bibliográfica e documental, o objetivo do artigo é propor uma discussão em torno do cenário latino-americano da onda punitiva que caracteriza a onda criminoso no México. Dada a materialidade simbólica do Estado punitivo, onde a estricta responsabilidade individual é incluída como característica ideológica (neo) liberal, o artigo relaciona as mudanças no valor social atribuído à força de trabalho contra as transformações no sistema de produção capitalista. Observou-se que, embora as taxas de encarceramento no México sejam comparativamente baixas, é necessário considerar outros elementos de configuração e disciplina da força de trabalho utilizados como contenção (segregação) e exterminio. O Estado Penal Mexicano sustentou a legitimação de um comando coercitivo centralizado, formando, em termos hobbesianos, o caminho para o leviatã com soberania absoluta, um poder indivisível, um enorme aparato repressivo e, acima de tudo, controle ideológico.

Palabras claves: Encarceramento, Punição, Precariedade laboral.

1- Una versión del presente artículo fue publicada como resultado del concurso de tesis de los becados del programa internacional de la cooperación CLACSO-CONACYT 2015/2016. Disponible en: Paula, Sara Conceição de. Entre el Leviatán y la bestia colosal: la violencia estatal en México como fenómeno de la ola punitiva / Sara Conceição de Paula. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO:CONACYT, 2017. nº 14).



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>



62 Julio-Diciembre 2019

Nuestrapraxis.Revista de Investigación Interdisciplinaria y Crítica Jurídica, año 3/ no. 5, Jul-Dic 2019, pp. 61-76. ISSN 2594-2727.

Introducción

El objetivo de este artículo es problematizar el perfil de la expansión del Estado Penal mexicano cuestionando la posibilidad de ubicarlo como parte del fenómeno de la ola punitiva. Para ello, tomando los aportes de la economía política del encarcelamiento, se busca contrastar las acciones penales reactivas del modelo incremental de corte represivo mexicano con los estudios sobre el contexto internacional del repunte penal y sus particularidades latinoamericanas, destacando los bruscos cambios de las acciones gubernamentales y sus vínculos con una reformulación del Estado con perfil punitivo y reactivo.

Se ha buscado articular tres argumentos centrales. El primero hace referencia a las principales características que asume el repunte penal destacando la responsabilidad individual estricta como característica ideológica (neo)liberal. El segundo argumento expone la teoría de la economía política del encarcelamiento y sus principales elaboraciones sobre el valor social atribuido a la fuerza de trabajo y la punición frente a las transformaciones estructurales en el sistema de producción capitalista. El tercer punto, por medio de una revisión bibliográfica y documental, reúne un mapeo del escenario latinoamericano en las últimas 4 décadas caracterizando el repunte punitivo en México a fin de profundizar las discusiones pioneras de la economía política del encarcelamiento posicionándolas a luz de las nuevas intemperies de América Latina. El intento es centralizar la discusión en el “híbrido” – entre el leviatán y la bestia colosal – que, de acuerdo con Anitua (2010), ha conformado en América Latina la “gran institución de secuestro”²

1. La materialidad simbólica del Estado Punitivo: ¿qué es el repunte penal?

Con relación al Repunte Penal, Pires (2004)³ pone en el centro de la discusión el término racionalidad penal moderna que puede ser comprendido como un retrato del identitario esencialmente punitivo que permeaba el sistema penal a partir del siglo XVIII. En síntesis, la racionalidad penal moderna considera únicamente los medios penales negativos, hostiles y autoritarios para que la sociedad se defienda contra el crimen. Esa perspectiva surgió por la influencia de los preceptos iluministas de una conciencia libre o libre elección, y por tanto, responsable por sus actos⁴, centrando así todo su énfasis en la responsabilización individual, dejando de lado todos los demás factores que interfieren en la dignidad humana (Abramovay, 2010:14).

El trabajo de Abramovay y Malaguti (2010), en el campo de la criminología crítica y la sociología, ha destacado el culto a la libre elección, núcleo del Contrato Social y del Iluminismo como concepción fundamental que sostiene los recientes cambios en las políticas penales. Posteriormente, el enaltecimiento de la libre elección, la expresión punitiva de la racionalidad penal moderna fue sufriendo profundas transformaciones teóricas. Marcarse en tal contexto la conformación de

2- Expresión popularizada por Michael Foucault en sus estudios sobre dispositivos presentes en las sociedades disciplinares. Gabriel Ignacio Anitua (2010) la utiliza al contextualizar el uso intensivo de la prisión, que él llama de “gran reclusión” exactamente en el momento en que se pensaba en la reducción de su uso.

3- Pires, A. (2004). A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos. *Novos Estudos CEBRAP*, n 68, marzo, 39-60.

4- Ninguno vínculo jurídico obligaría a someterse a otro – distinto de la relación de corvée entre soberano y súbditos – El campesino pasa a ser “libre” con solamente la “imperiosidad de satisfacer las propias necesidades vitales” lo que “obligaría a las masas a ceder contractualmente su propia capacidad laboral” (Pavarini, 1983:29).



una nueva sociedad que pasa a observar como insostenibles las contradicciones y desigualdades producidas en el capitalismo y empieza, como respuestas a varios conflictos sociales, a poner al Estado como el responsable por la beneficencia pública y, posteriormente, como promotor del bienestar social. Como marcos de esta trayectoria, es posible mencionar entre otros, el New Deal y el surgimiento de la sociología que marcan una ruptura con la tradición Iluminista de la libre elección (Melossi, 1992; Abramovay, 2010).

Si el periodo entre y pos guerra permitió una contingencia donde tales fundamentos asumieron una interpretación del problema de la cuestión social a partir de la racionalidad social —consolidadas “en las formas de vida creadas por las relaciones políticas y culturales” (Abramovay, 2010: 18)⁵—, es en el neoliberalismo que la libre elección y la responsabilidad individual volvieron a ser evocadas como fundamento.

Si bien antes de la crisis de la deuda se planteaba que la pobreza, la precariedad del empleo y la marginación eran resultado de fallas en el modelo económico, a partir de las reformas estructurales se desvincula la relación entre desarrollo económico y social, señalando que la pobreza se debe a las fallas individuales, asociadas a la baja educación y a los problemas de salud provocados por la desnutrición de la población en condiciones de pobreza extrema (Damián, 2014:734,735).

Es exactamente en este mismo período, inicio de la década de los 70, que el estudio criminológico gana nuevas visiones, con presencia más expresiva en el campo académico. Surgen los estudios que cuestionaban las causalidades sociales del crimen recuperando significativamente la lógica del crimen como una decisión individual retornando a la racionalidad penal moderna (Abramovay, 2010; Pires, 2004).

Empieza entonces una cosecha de diversas teorías sobre el Derecho Penal que daban cuenta de la ebullición de las interpretaciones del período. Por un lado, los abolicionistas liberales que sostenían la extinción del Derecho Penal que sería sustituido por un derecho administrativo sancionador. Por otro, sobre todo en los Estados Unidos de América (EEUU), lugar de relevancia para el estudio de la criminología, las maximalistas antiliberales ganaron repercusión y espacio en las relaciones públicas y en el delineamiento de la postura del Estado con el individuo que buscó rechazar así toda la complacencia sociológica con la sanción implacable para domar a los depredadores violentos y otros criminales incorregibles. Esta última generó por toda América una explosión significativa de la población carcelaria y una búsqueda por parte de los gobiernos por la centralidad del control punitivo (Malaguti, 2012; Abramovay y Malaguti, 2010; Wacquant, [2003]2013, 2011; Di Georgi, 2006; Colye, 2004; Sozzo, 2015). Las más conocidas expresiones en la política de criminología fueron la teoría de la tolerancia cero (todas las infracciones deben ser tratadas con el mismo rigor), la teoría de las ventanas quebradas (broken window, cohibir pequeñas infracciones para evitar mayores daños), la teoría de las tres faltas y estás afuera (tres infracciones de pequeño porte transcurren en una sanción más severa) y el Derecho Penal del Enemigo representando la interpretación más maximalista entre ellas.

Importante es resaltar como un hilo básico conecta tres características persistentes con el llamado (neo) liberalismo en Latinoamérica. Uno, el enaltecimiento de la figura del emprendedor y

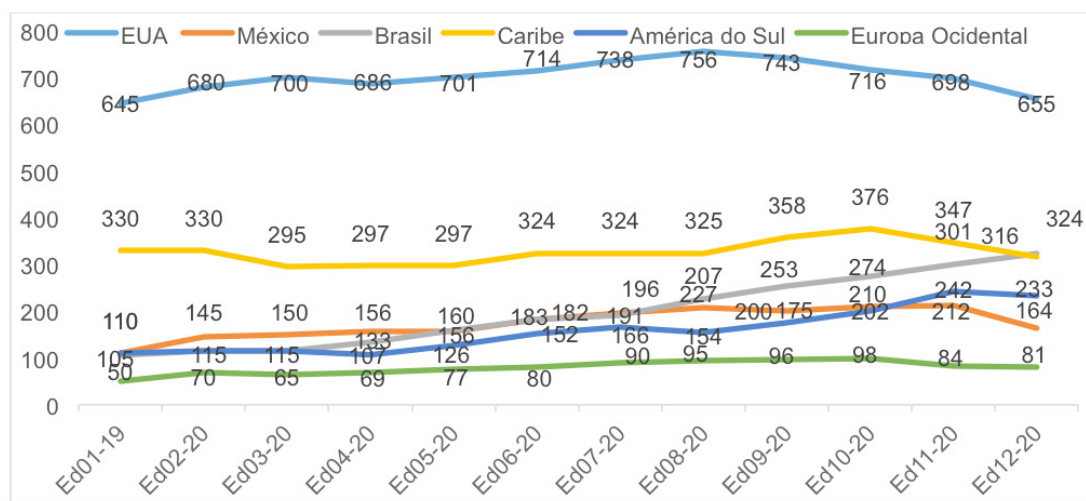
5- En esa línea, se podría ubicar los teóricos del labelling approach, Michel Foucault, Jock Young en la criminología radical y toda la discusión del campo de la criminología hasta los años 70.



del emprendedurismo como medio alternativo a la escasez de empleos y de bienestar. Dos, en el caso de las políticas sociales/asistenciales, la utilización de la condicionalidad y el uso cada vez más focalizado de los programas basados en los méritos individuales y clasificación en dirección al fomento de un tipo de comportamiento (Vite Pérez, 2014; Castel, 2014; Vásquez Olivera, 2012). Tres, en el caso de las políticas penales, la activación de todas las áreas del aparato penal y el combate incremental de la criminalidad que recupera la idea del crimen como una decisión individual⁶. Así, “exalta a los vencedores por su vigor y por su inteligencia, y fustiga a los ‘perdedores’ de la ‘lucha por la existencia’, apuntando sus fallas de carácter y sus deficiencias de comportamiento” (Abromovay, 2010:21, traducción libre).

El Repunte del Estado Penal se ha manifestado de forma destacada en los Estados Unidos e Inglaterra y se diseminó principalmente en Europa y en América Latina en las últimas tres décadas (Argüello, 2005), dando forma a lo que Wacquant (2004) llama la ola punitiva para expresar los alcances y relevancia de la adopción de este perfil en diversos países. Los datos sobre el crecimiento de la población encarcelada son sorprendentes: considerando los niveles de población en prisión en el mundo, desde 2000 hasta 2018, África tuvo un crecimiento de 28,8%, Asia (sin China y India) 37,7% y América (sin EEUU) 40,8%.

Figura 1
Tasas de encarcelamiento en instituciones penales por cada 100 mil hab.



Fuente: Ediciones del ICPS (1988-2018). Adaptación de la autora (2018).

Los datos de encarcelamiento son aún más alarmantes al considerar su evolución en las últimas décadas. En 1999 la población encarcelada en el mundo era 8 millones (Walmsley, 1999). Ya en 2014 más de 10.2 millones de personas en el mundo se encuentran en instituciones penales. En el informe ICPS de 2018, el total de personas que están en alguna institución penal llega a 10,74 millones. Entre ellos, 2,1 millones de presos en los EEUU, 690.000 en Brasil y 204.000 en México. De acuerdo con el Institute for Criminal Policy Research⁷ (ICPS, 2014), a partir de los informes de la World Prison Population List, (Ranking mundial), estarían 9 países americanos entre los 12 con

6- Marca presente en la discrepancia entre los recursos destinados a las políticas penales y sociales.

7- En los dos sitios están disponibles las 12 ediciones del World Prison Population List. Disponible en: <http://www.prisonstudies.org/> y <http://www.apcca.org/>.



más elevada tasa de encarcelamiento. En los datos de ICPS (2016) de los 12 países con mayores tasas de encarcelamiento del mundo, 6 integran el continente americano. Sin embargo, si consideramos los 30 primeros países del ranking mundial de las tasas de población encarcelada, 22 de ellos son americanos.

Conforme presenta Carranza (2009), las tasas de encierro duplicaron y hasta triplicaron en América Latina entre 1992 y 2008 llegando a índices de densidad penitenciaria de 120 por ciento, con relatos de numerosos motines y muertes.

La ola punitiva es un consenso, una perspectiva hegemónica, una ideología que, en su envergadura social, contiene una forma de actuar del Estado que es tangible a la relación entre éste y la cuestión social. La centralidad del retorno a la racionalidad penal moderna surgida del Contrato Social (Abramovay y Malagut, 2010), se ha presentado como regla básica de las relaciones sociales imperando en distintos fenómenos. Se manifiesta en el populismo punitivo, en linchamientos colectivos, en la ascensión de programas “amarillos” o “rojos”, en manifestaciones sociales contra programas asistenciales, entre otras formas, conformando la envergadura de lo que Loïc Wacquant (2013) llama materialidad simbólica.

El desmantelamiento del Estado cargado en la propuesta autodenominada neoliberal no hace el Estado mínimo en el sistema penal, y si máximo. En ese sentido, no se trata por tanto, de una reducción del Estado o debilidad. Se trata de un cambio en su proceder, en sus acciones gubernamentales. Su regla ahora es, según Wacquant (2013), aplicar la doctrina *laissez faire, laissez passer* con relación a las desigualdades sociales, pero se presenta “brutalmente paternalista en el momento en que se trata de administrar sus consecuencias” (Argüello, 2005:6, traducción libre).

A regulação das classes populares, levada adiante por aquilo que Pierre Bourdieu chama de “mão esquerda” do Estado – a que protege e melhora as oportunidades de vida, e é representada pelo direito ao trabalho, à educação, à saúde, à assistência social e à moradia pública -, é suplantada (nos Estados Unidos) e suplementada (na União Europeia) pela regulação da sua “mão direita”, a que administra a polícia, a justiça e a prisão, cada vez mais ativa e interveniente nas áreas subalternas do espaço social e urbano (Wacquant, 2013:32).

La glorificación del brazo penal se dibuja en la contestación tecnocrática al problema de la criminalidad, que se concentra en los efectos del delito (una imagen proyectada y politizada de la víctima, el miedo, los costos con la seguridad) y no en sus raíces estructurales (económicas y sociales) y político-ideológicas (Wacquant, 2013, 2011; Abramovay y Malagut, 2010; Argüello, 2005).

2. Economía Política del encarcelamiento: El valor de vida y el valor de la fuerza de trabajo.

Conforme apunta Acastio Augusto (2010), justo en el período donde se confía en la ineficacia de la prisión y de la ineficacia de las políticas de seguridad reactivas, se ha presenciado la ampliación masiva de sus usos. ¿Cuáles razones llevaría la sociedad a evocar una bestia colosal después de superado el terror del Leviatán? La obra “Leviatán” de Thomas Hobbes (2014) presenta más que una discusión en torno del Estado absolutista. Ofrece una clásica interpretación de la antropología emergente en su época donde deja clara la relación instrumental entre el in-



dividuo, Estado y la sociedad. En los términos hobbesianos, el individuo vive en la búsqueda a todo costo de su propio provecho. De esa manera, la vida en sociedad es altamente instrumental y desaparece toda idea de comunidad cooperativa ya que no existe finalidad otra, que no sea individual. Por esta vía, las cosas y personas (términos muy próximos en su interpretación) no tienen valor intrínseco, sino atribuido. El valor del hombre, tal cual todas las cosas, es su precio. Así, el valor no es absoluto: es dependiente de la necesidad y juicio de otro.

La economía política del encarcelamiento ofrece a la discusión del repunte penal en Latinoamérica al menos tres aportes. El primero es la relación histórica entre el mercado de trabajo y el sistema punitivo (argumento fundamental de la criminología crítica): “en todo sistema de producción hay una tendencia a descubrir y a utilizar sistemas punitivos que corresponden a las propias relaciones de producción” (Argüello, 2005:13). De tal manera, en la consolidación del capitalismo, el objetivo de las primeras formas de prisión moderna era la disciplina subyugada a “transformar el sujeto real (condenado) en sujeto ideal (trabajador), adaptado a la disciplina del trabajo en la fábrica” (Argüello, 2005:17; Melossi, 1980).

El segundo aporte es la relación que hay entre el valor de la vida y el valor socialmente atribuido a la fuerza de trabajo.

Cuadro 1
La configuración del mercado laboral y la práctica penal y social del Estado

Característica del capitalismo	Estructura productiva y sentido de la disciplina y adecuación	Configuración del mercado laboral	Posturas del Estado (sistema penal)	Posturas del Estado (Beneficiencia pública)
Consolidación del capitalismo	Manufactura y la ética del trabajo asalariado	Exceso de mano de obra	Exterminio y políticas sanguinarias	El “pobre bueno” pasible de beneficiencia (autorización por parte del Estado para pedir limosnas) y el “pobre malo” privado de la beneficiencia y más vulnerable a las prácticas de exterminio.
Estado Liberal	Fábrica como principal institución	Escasez de mano de obra	Prisión, casas de correcciones, remisión por medio de la subordinación al trabajo explotado y la condición de mercancía.	Inicio de un complejo organizado de la beneficiencia pública basado en la corrección y reinserción social en la ética fabril.
Welfare state	Conflictos socio-políticos	Búsqueda por el pleno empleo	Enaltecimiento del Estado Social de Derechos y derechos fundamentales	El trabajo asalariado como centralidad de la organización social. Enaltecimiento de la “política social”
Neoliberalismo/ Posneoliberalismo	Mercado	Exceso de mano de obra	Exterminio, encarcelamiento masivo, Ascensión del Estado Punitivo	Separación de los pasibles de asistencia – “los incapacitados” - por parte del Estado (focalización de políticas) y condicionalidad rumbo la disciplina al contexto de incerteza y precariedad del mercado laboral. “Desarrollo del capital humano para la competencia”

Fuente: Elaboración de la autora (2016).



Rusche y Kirchheimer (2004), al indagar sobre las razones para los cambios de los métodos de punición, ofrecen en su exhaustiva investigación la conclusión fundamental: en la historia capitalista, los cambios en el sistema punitivo están relacionados con el exceso y escasez de mano de obra y la necesidad capitalista de producción. Es decir, operan en la configuración capitalista del mercado laboral.

[...] la abundancia de la fuerza de trabajo está relacionada a la desvalorización de la vida humana para el sistema punitivo, lo cual se utiliza ampliamente en la pena de muerte y en las mutilaciones de los cuerpos de sus víctimas (como en la Baja Edad Media). En momentos de escasez de fuerza de trabajo, en lo tanto, los métodos punitivos se transforman, delante de la necesidad de explotarla por medio de la pena de prisión (como en el período del mercantilismo del siglo XVII) (Argüello, 2005:13).

Los trabajos pioneros de Georg Rusche y Otto Kirscheimer (1939:2004), confiados por cerca de 40 estudios empíricos en una decena de sociedades capitalistas, apuntan para la existencia en el nivel societario de una estrecha o positiva correlación entre el deterioro de la condición del mercado de trabajo y el aumento de los efectivos presos – al paso que no existe vínculo alguno comprobado entre índices de criminalidad e índices de encarcelamiento. Como concluye Jankovic (1977) en su investigación: el crecimiento del desempleo determina el aumento del número de presos, independientemente del volumen del crimen.

Y por último, el tercer aporte es la vinculación histórica entre la asistencia y el derecho penal para subordinar y disciplinar. Para Rusche y Kirchheimer (1939:2004), la historia de la prisión moderna sólo puede ser entendida a partir del rol del complejo de la beneficencia pública en las casas de corrección.

4. Entre el Leviatán y la Bestia Colosal: control, neutralización y exterminio

Considerar la América como el epicentro de la ola punitiva no es una constatación exagerada. La región fue marcadamente influenciada por la orientación de combate al crimen, originaria de los Estados Unidos que, a su vez, no se restringió a América (Wacquant, 2013; 2011). Fue en los Estados Unidos que se presentó al mundo la manera hacer retroceder la delincuencia en ese nuevo paisaje económico, transformando el sistema penitenciario como el tercer mayor empleador del país. Según Wacquant (2013), en los Estados Unidos se puede observar la contención represiva de los pobres por medio de un encarcelamiento en masa que jamás fue visto en una sociedad democrática (aumento de 314% en 20 años). Así, “la guerra contra la pobreza fue sustituida por una guerra contra los pobres” (Wacquant, 2013:96).

Como destaca Wacquant (2013), el aumento de la población encarcelada en los Estados Unidos no fue resultado de un aumento de la criminalidad violenta y sí debido a un cambio de práctica por parte de los poderes públicos con relación a los sectores pobres, que los identifica como hipocentro de la irradiación de la criminalidad; mientras, la precarización y la contracción de las políticas sociales crearon contextos más caóticos. Tal como lo presenta Argüello, (2005), sin la industria del control del crimen, el mercado laboral no tenía buenos informes en ese país. Según Beckett, Harding y Western (Apud Argüello, 2005:7), el bajo índice de desempleo americano compa-



rado con de los países europeos de la década de los 90 es, en parte, un resultado del elevado índice de encarcelamiento en ese período. Es decir, la fuerte intervención americana en el mercado laboral fue modelada por su sistema penal.

Para Argüello (2005), la dinámica entre el Estado Punitivo con la fuerza de trabajo pueden ser observados en dos tendencias. La primera, una práctica (poco innovadora) de la extracción de elevadas tasas de plusvalía de las prisiones como industria altamente lucrativa. Llamado como el binomio full-scale management, acerca a la argumentación los estudios sobre el inicio del capitalismo y la simbiosis entre la cárcel y la fábrica. De esa manera, las prisiones privadas pueden ofrecer en los países ricos y a las multinacionales la “comodidad de explotar la mano de obra esclava legalmente, sin desalojarse para los quintales del mundo” (Argüello, 2005:19).

El otro fenómeno destacado por Argüello (2005) está presente en la realidad de los países latinoamericanos, pero también es una práctica observada en países desarrollados que destinan este método a grupos preferenciales concentrados en su territorio. En este caso, la fuerza del trabajo no asimilada por el mercado es neutralizada, tal cual el modelo de prisión en Pelican Bay, que objetiva confinar la basura y el residuo de la globalización donde el objetivo no es más la disciplina para el trabajo y sí la contención. En ese aspecto, resalta una cuestión fundamental de la gestión diferencial de ilegalidad⁸ que tiene como objeto los sectores sociales vulnerables: la inmovilidad de los pobres, por discriminación por raza o migrantes indeseables.

Wacquant (2011) presenta el carácter discriminatorio de las prácticas policiales y judiciales en diversos países. Conforme señala el autor, en diversos países se presenta la sobrecondenación en la reclusión de los individuos marginalizados por el mercado de trabajo, como, por ejemplo, en los Estados Unidos, el hecho de ser desempleado hace al sujeto más susceptible de penalización en la determinación de la pena que ser negro. En Francia, la mitad de las personas encarceladas en 1998 tenían nivel de educación primaria contra 3 por ciento con estudios universitarios. En Inglaterra, entre los presos, 83 por ciento son de clase obrera y 43 por ciento abandonaron la escuela antes de los 16 años, y uno de cada seis no tenía domicilio fijo próximo a su período de prisión. Conforme señala el autor, más destacado que en cualquier otro período, los clientes naturales de las prisiones europeas son las camadas precarizadas de la clase obrera; especialmente jóvenes de ascendencia africana.

8- Concepto sostenido por Rusche y Kirchheim y elemento de la tesis de Foucault.



Cuadro 2
Posibles características de un Repunte del Estado Punitivo

	Práctica	Objetivo	Países	Grupos preferenciales
Full-scale management (Argüello, 2005; ICPS, 2014, 2016)	La venta de la fuerza de trabajo de los encarcelados, asociado o no con el uso de presidios privados.	Reducir los costos con la prisión, tornándola un medio de rentabilidad económica. "Beneficio para la sociedad" por medio del trabajo.	Países con elevadas tasas de encarcelamiento que buscan en la lógica empresarial la eficiencia del aparato penal. Ej. Estados Unidos	Discriminación étnica (principalmente negros) y desempleados
Neutralización (Argüello, 2005; Acassio, 2010, Wacquant, 2010, Martínez, 2010)	Incremento en la rigurosidad de las penas y dificultad administrativas en el aparato penal haciendo con que aumente el número de contemplados	Objetiva la neutralización de determinados grupos sociales confinándolos en las prisiones	Países desarrollados y no desarrollados	En países desarrollados la preferencia está en los migrantes de las clases más bajas. En países no desarrollados son creados verdaderos campos de concentración de miserables.
Higienización (De Paula, 2016; Teixeira, 2012; Acássio, 2010)	Prohibición de tránsito o permanencia de determinados grupos en espacios determinados como "sociales"	Prácticas de higienización hecha por la policía o guardias en los centros urbanos	-	Población en situación de calle o pobreza extrema en contexto urbano
Disciplina por programas sociales (Wacquant, 2011, 2004; Acassio, 2010; De Paula, 2014)	Dos formas: programas sociales como diversificación de la pena o políticas sociales con fuerte énfasis de condicionalidad a subordinación hacia la precariedad laboral	Los programas sociales con tono de disciplina y reinserción en las camadas de empleos más precarizadas. Sostiene la condicionalidad al trabajo o son programas sociales de contención	Países con cierta tradición en intervención Estatal en el ámbito social, principalmente en materia de derechos fundamentales	Poblaciones potencialmente criminales o que el encierro en una prisión predio consiste en una clara infracción de derechos humanos.
Segregación (Wacquant, 2013, 2011, Malaguti, 2012)	Contención por policías o programas sociales que visan mantener determinada población confinada en un determinado espacio, controlada y monitoreada	Contención étnico racial y económica, marcada en los "potenciales criminales" impidiendo el tránsito o circulación	Países desarrollados y no desarrollados	Grupos étnicos y pobres.
Reclutamiento (Piñeyro, 2010; Casede, 2012; CESIJ, 2015)	Utilización de la prisión para reclutamiento para el crimen organizado	Desvío funcional de los aparatos penales	Sistemas penales marcados por la fusión entre el crimen organizado y el Estado	Población carcelaria
Exterminio (Argüello, 2005; Wacquant, 2011; Castro, 2010; Sozzo, 2015, Anitua, 2010)	La transformación en un espacio de infracción de los derechos humanos o el uso de los aparatos penales para exterminar determinado contingente poblacional	Matar con la prisión, permanencia del uso de políticas punitivas y reactivas aunque se hayan probado su ineficiencia y costo social	Generalmente países no desarrollados con altas tasas de encarcelamiento	Grupos marcados por alguna estigmatización étnica, espacial o/y económica.

Fuente: Elaboración de la propia autora, a partir de la literatura revisada (2016).



En los países periféricos donde se presencia la ola punitiva, los problemas en la estructura productiva y la significativa falta de calificación de la población, considerando la competencia global de los mercados, hace que el número de no incorporados en el mercado laboral sea aún más significativo. Surge entonces otra práctica ejercida para neutralizar y contener el exceso de fuerza de trabajo, el llamado por Marx ejército industrial reserva (Marx, 1996a), conforme presenta las investigaciones de Rusche y Kirchheimer (2004), Pavarini (1983) y Melossi (1992): la eliminación; sea por acción u omisión del Estado.

Según Argüello (2005), en países periféricos, como en América Latina, se observó la formación de verdaderos campos de concentración de miserables (Abramovay y Malaguti, 2010; Argüello, 2005; Wacquant, 2011; Sozzo, 2015; Anitua, 2010) y la cosecha de conflictos intermediados por la impunidad y la corrupción llegando a manifestar tasas de exterminio de segmentos específicos de la población que son superiores o equiparados a los contextos de guerras.

Tales aspectos manifiestan “un encarcelamiento de diferenciación con el objetivo de mantener a la parte, facilitando la substracción del cuerpo societal” (Wacquant, 2011:118). Evidentemente, con relación a los migrantes es posible hablar de un “verdadero proceso de criminalización de los migrantes que tiende, por sus efectos desestructurantes y criminógenos, a (co)producir el propio fenómeno que supone combatir” (Wacquant, 2011:121). La finalidad del Estado Punitivo es clara: distinguir el pobre bueno —el emprendedor, con dos o más empleos, que trabaja y estudia por la noche, que tiene su pequeño negocio; el incapacitado o el promotor del desarrollo y del bienestar de la nación (a quien la política social —focalizada y selectiva— debería atender)—, del pobre malo —el feo, malo y sucio, vagabundo, bandido, sin valores y carácter, de determinadas características de un espacio segregado, por ejemplo, las favelas⁹, (a quien la política penal —incremental y expansiva— debería atender).

Wacquant (2011) considera al sistema carcelario como el recurso para contener la escalada de la miseria y los disturbios urbanos. En Brasil, el período de 1989 presentó el reflejo de una carga históricamente grande de disparidades sociales vertiginosas y una gran masa de población en situación de pobreza que, juntamente, ofrecieran una contingencia de un crecimiento inexorable de la violencia criminal, principalmente en los grandes centros poblacionales. El índice de homicidio en Río de Janeiro, São Paulo y Recife ascendió a 40 por cada 100,000 habitantes y el índice nacional supera los 20 por cada 100,000. Es decir, que es dos veces más que el índice norteamericano del inicio de 1990 y 20 veces más el nivel de los países de Europa occidental. En 1992 la policía militar de São Paulo mató 1,470 civiles (contra 24 muertos por la policía de New York y 25 de Los Ángeles) sosteniendo el récord absoluto americano.

Según el Mapa de la Violencia 2015 de Jacobo Waiselfisz (Flacso Brasil, 2016), el homicidio tiene raza y edad. Mientras la tasa de homicidio de blancos fue reducida en 23 por ciento entre 2003 y 2012 (de 14.5 muertes por 100,000 habitantes para 11.8) las víctimas negras aumentaron en 14.1 por ciento, representando un incremento de 24.9 a 28.5. Solamente en 2012, por cada 10 blancos víctimas de homicidio, murieron 25 negros. Entre los jóvenes, las proporciones son más alarmantes. Conforme el mapa, entre 0 y 17 años de edad, murieron víctimas de homicidio 1,127 niños, niñas y adolescentes blancos y 4,064 negros. Entre ellos, 703 de los blancos y 2,737 de los negros, tenían entre 16 y 17 años de edad.

Considerando la población general, el índice de victimización negra presentó la marca de 5.7 por ciento (lo que es proporcional al tamaño de las respectivas poblaciones). O sea, para cada 10

9- Un prejuicio por raza, vestimentas, entre otros aspectos. En Brasil, el caso recientemente más debatido fue los llamados “rolezinhos” donde grupos de moradores de las favelas intentaban acceso a espacios de alto poder adquisitivo, y fueron retirados por policías y guardas privados con el pretexto de representaren una amenaza a los usuarios del lugar. Una referencia a procesos parecidos puede ser encontrado en la canción de Falcão “Minha Alma”. Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=vF1Ad3hrdZy>, acceso en marzo de 2017.

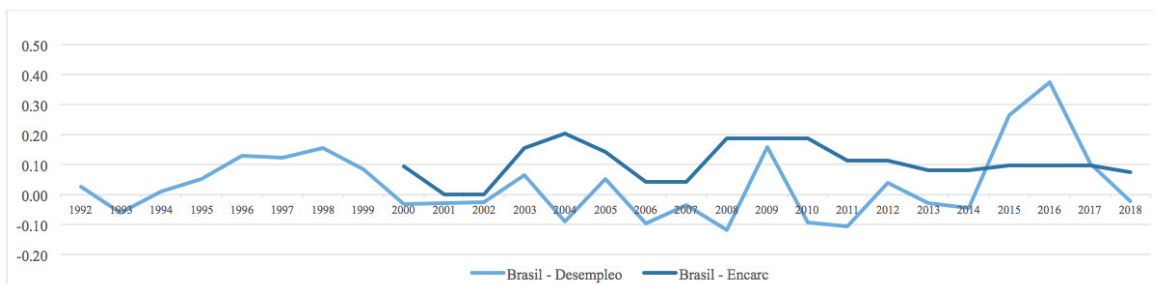


blancos víctimas de homicidio, murieron 57 negros. Todavía, cuando se enfoca en el grupo de los adolescentes, entre los blancos, la tasa de homicidio fue de 24.2 por 100 mil y de los adolescentes negros alcanzó 66,3 en 100 mil. En esto caso, la victimización llega a 173.6 por ciento que, en proporción, murieron casi tres veces más negros que blancos.

5. Las caras punitivas en México

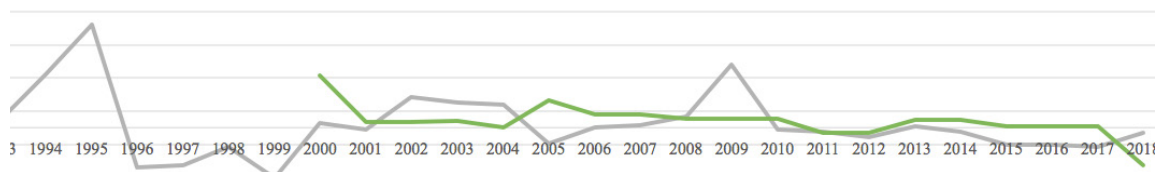
La discusión sobre los aspectos característicos de la ola punitiva anteriormente presentados culmina en la tentativa de elaborar un mapeo de una posible integración de México al fenómeno del repunte penal. Con referencia a México, aunque posee la tercera mayor población penitenciaria de América, su tasa de encierro (164 en 2018) es pequeña comparada a otros países en período próximo: los Estados Unidos (655), Islas Vírgenes (US) (542), Barbados (300), Costa Rica (374), Puerto Rico (313), Brasil (324) Colombia (240), Venezuela (178) o Chile (233). Considerando los números de población encarcelada, al tomar como comparación Brasil y México en Latinoamérica, entre 2015 hasta 2018, mientras Brasil crecía 14%, México decayó su posición 20%. Además, México presenta en varias ocasiones comportamiento diverso en la relación entre las tasas de encarcelamiento y los niveles de desempleo.

Figura 2
Variación entre las tasas de encarcelamiento y desempleo (estimación modelado OIT): Brasil.



Fuente: Datos del ICPS y ILOSTAT¹⁰. Adaptación de la autora (2018).

Figura 3
Variación entre las tasas de encarcelamiento y desempleo (estimación modelado OIT): México.



Fuente: Datos del ICPS y ILOSTAT. Adaptación de la autora (2018).

10- Acceso en: <https://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS>.



El índice de encierro o la densidad penitenciaria, generalmente indicador de la eminencia de un repunte del Estado Penal, puede no presentar elementos empíricos relevantes en una aproximación inicial. Sin embargo, a medida que se contrasta otros aspectos y la historia del sistema penal mexicano en las últimas cuatro décadas, es posible observar que perfila la ascensión punitiva con un carácter multifacético, caracterizado por influencias internacionales, conflictos de poder entre actores locales, principalmente del crimen organizado y la omisión estatal.

a) "made in USA": La importación de políticas de seguridad

Es interesante destacar el papel de la Alianza para la Seguridad y la prosperidad de América del Norte (ASPAN) (antecedido por el Tratado de Libre Comercio, TLCAN) creada en 2005 y su influencia en la seguridad nacional y pública para América Latina, a pesar de que efectivamente la Alianza incorpora solamente Canadá, Estados Unidos y México. La ASPAN generalmente es estudiada por el compromiso del sector energético mexicano y sus implicaciones, pero también presenta un fuerte impacto en los temas relacionados a la seguridad nacional y pública. Según Piñeyro (2010), tal Alianza es uno de los fundamentos para la estrategia de seguridad pública anticriminal en México. La ASPAN estaría compuesta por una relación trilateral que se pauta en un ejercicio de acercamiento frente el proceso de globalización económica y en el incremento de la inseguridad a nivel internacional – el crimen organizado y el terrorismo. La Alianza presenta una fuerte tónica en la centralización de mando y orientación para la seguridad. Centralización que parece de cierta forma no estar pautada en la soberanía nacional, pero que es compartida con los demás países del Norte en el denominado "proceso permanente de integración de América del Norte" (p.15).

Es a partir de esos lineamientos que Piñeyro (2010) aborda la incorporación de la ASPAN en la cuestión carcelaria y en la utilización de las Fuerzas Armadas Mexicanas que se destacó, en los últimos 15 años, por un alto impacto en la fragilidad de la seguridad pública y una erosión paulatina de la seguridad nacional¹¹. Según el autor, las últimas modificaciones en la seguridad pública la encierra una cadena de acciones reactivas de un modelo incremental que, con corte represivo, amplía la inseguridad. El resultado es una desconsideración del nervio económico y social de los reclutados. Para Piñeyro (2010), las características más destacadas son las explicaciones infundadas para el no funcionamiento de la estrategia reactiva, la pérdida del contenido integral (preventivo) de la política de seguridad y la disociación de la seguridad nacional con un desarrollo social y político incluyente.

Esa postura es reflejo de una apuesta en el mero crecimiento económico que se supone derivará sus beneficios a toda sociedad mediante el "libre" comercio. Para el autor el modelo incremental con características en la centralidad del mando, énfasis en la técnica y en la burocracia que incide consecuentemente en un problema presupuestal recae en el falso supuesto de que la violencia está relacionada con la pobreza y las fallas del carácter. Para él, al menos en América, la violencia por el narco manifestada en México se vincula con la globalización y la abertura comercial. Y el crecimiento en los últimos años del narcotráfico en México, a su vez, es traspasado por el retraso y fallas en la comunicación rural, la ausencia del Estado, la demanda creciente por drogas, armas y el control de rutas a los grandes mercados.

b) Los grupos "preferenciales": neutralidad, alistamiento y el exterminio

En Brasil, como fue presentado, el genocidio se concentra entre jóvenes negros y pobres. Infelizmente, con relación al exterminio de jóvenes, en 2013, México alcanzó el top del ranking. La tasa fue de 95.6 por cada 100 mil habitantes, seguidos por El Salvador (55.8), Brasil (54.9) y Colombia (49.3). Para la Social Progress Imperative (que mantiene un ranking de calidad de vida en 132

11- La literatura es vasta. Destacase Astorga (2007); Froylan (2010) y Ramos (1995).



países), Brasil y México poseen una posición destacada en la inseguridad de la población. La ONG desarrolló un índice de inseguridad basada en cinco criterios que incluye: número de homicidios, crímenes violentos, percepción de criminalidad, terrorismo y muertes en el tránsito. Conforme a la escala de 0 a 100, donde 0 es la nota máxima de inseguridad, México está en la 9ª posición y Brasil en 11ª.

Conforme al Colectivo de Análisis de la seguridad con Democracia – Casede (2012), en México hubo significativos incrementos en los niveles de encarcelamiento. Desde 1995 hasta 2005: el número de la población penal creció de 90,000 a casi 190,000 y alcanzó en 2011 aproximadamente 220,000. Sin embargo, también presentó una disminución progresiva de los internos que han recibido una sentencia. Con relación al porcentaje de la población penal de 2000-2012, en el Gobierno de Zedillo (1994-2000) los internos sentenciados eran 71 por ciento. A su vez, en el gobierno de Fox (2000-2006) fue de 65 por ciento y en el de Calderón (2006-2012) acompaña tal progresión con 47 por ciento.

Según el Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia (CESIJ, 2015) de la Universidad de las Américas Puebla, México es el segundo país en el Índice Global de Impunidad (IGI 2015)¹². De acuerdo con la organización, México presenta dos grandes problemáticas identificadas: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. De acuerdo con los resultados, el sistema de seguridad no lleva a cabo la apertura de procesos de averiguación de la mayor parte de las personas sospechosas, detenidas, arrestadas o bajo arraigo (CESIJ, 2015:64).

Conforme el estudio, México posee un promedio de 4 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio general es 17. Otro aspecto importante es que según IGI (2015) casi la mitad de la población detenida no tiene sentencia (46%). Esos datos son contrastados con un crecimiento del cuerpo policiaco en México —son 355 policías por cada 100 mil habs.— aspecto que está próximo al promedio de los países del ranking de impunidad, 332 por cada 100 mil habs. De la misma manera, evidencia una sobrepoblación penitenciaria con déficit de personal para cubrir los servicios mínimos (CESIJ, 2015).

En un sentido próximo de cuestionar a la eficiencia de la prisión como aparato de neutralizar o de exterminio, es necesario destacar su otro papel. Según Casede (2012), de hecho, las cárceles se tornaron espacio de reclutamiento de organizaciones criminales —una de las mayores empresas mexicanas multinacionales del mundo— que hace que la prisión esté deliberadamente desvinculada de una readaptación social. Infelizmente, la eliminación de la fuerza de trabajo, por omisión o participación del Estado puede ser observada en las pérdidas sociales sufridas en el combate al crimen organizado. Como afirma Froylan (2010) y Astorga (2007), las pérdidas sociales por el ejercicio de las políticas de control de drogas son más severas que el delito contra la salud. El narcotráfico pasó a ser considerado como infracción a partir de la década de los 60 y 70 y, desde entonces, se empieza a combatir la relación económica establecida que, a su vez, forma a los traficantes a partir de la propia prohibición. Según cifras oficiales del instituto de Estadística mexicana, entre años 2007 y 2014 murieron cerca de 164 mil civiles. El fenómeno presenta cifras superiores a los números de conflictos de las últimas guerras, por ejemplo, en Vietnam¹³, Afganistán e Irak¹⁴.

Por más que sea complejo sostener un argumento que apunta la omisión estatal frente a los exterminios como estrategia deliberada del Estado, por otro lado, en este contexto multifacético,

12- Filipinas, México, Colombia, la Federación de Rusia y Turquía son los países con mayores índices de Impunidad e impartición de Justicia.

13- <http://www.jornada.unam.mx/2012/12/11/politica/015n1pol>

14- <http://www.sinembargo.mx/21-10-2013/788369>



no es tan complejo verificar los beneficios que inciden en la contención de las tasas de pobreza y extrema pobreza. Esto, tanto por parte del exterminio de un segmento específico de la población en la “guerra contra el narcotráfico” cuanto por parte del rol que la actividad económica ilícita y el crimen organizado ejercen en la región; aún más considerando las zonas donde estas relaciones se establecen y logran su fuerza de trabajo (Froylan, 2010).

Actualmente, hay un despunte en la lucha por los Derechos humanos en el país con relación a las desapariciones forzadas y el retroceso en la Ley general de la tortura en las últimas reformas¹⁵. La tortura se ha consolidado en el país como práctica para control social, marcando un escenario de impunidad, pues generalmente los que torturan son los mismos que investigan la denuncia (Arnaiz, Cruz, Méndez, 2016).

Consideraciones finale

El objetivo fue analizar el perfil del Estado mexicano a partir de los aportes de la economía política del encarcelamiento y la materialidad simbólica del repunte penal cuestionando la posibilidad de ubicarlo como parte del fenómeno de la “Ola Punitiva”. Conforme lo presentado, aunque las tasas de encarcelamiento en México sean bajas en comparación con otros países de porte similar, se debe considerar otros elementos de configuración y disciplina de la fuerza de trabajo como la contención y el exterminio. Además, es identificada la clara voluntad del gobierno en permanecer en el mismo paradigma incremental de carácter policiaco reactivo, aun percibiéndose la ineficacia de tal medida (Fiorenza, 2010).

De igual manera, no se debe dejar de lado el rol de la expansión policiaca justificada por la presencia del narco, que ha accionado el populismo punitivo como forma de legitimación del gobierno (Arteaga, 2006). Con tal proceder, el Estado Penal Mexicano sostuvo en poco tiempo la legitimación de un mando gubernamental centralizado, que está envuelto en una base de asimetría de poder coercitivo entre las esferas municipales, estatales y federales. Estaría conformado así, en términos hobbesianos, el camino para el leviatán con soberanía absoluta, poder indivisible, enorme aparato represor y, sobre todo, control ideológico. Sin embargo, a su vez, el modelo absolutista asume un ropaje neoliberal inaugurando en la historia de las democracias modernas un elemento bárbaro y no inédito en el capitalismo de exterminio/neutralización de los segmentos más bajos de la fuerza de trabajo reserva. Por lo tanto, conformase la bestia colosal que no se puede desvincular de la expansión de la pobreza (y del narco) y el ascenso de los multimillonarios mexicanos en los últimos años (Esquivel, 2015).

Bibliografía

- Abramovay, P. “O grande encarceramento como produto da ideologia (neo) liberal”. En: Abramovay, P. V.; Malaguti, V. (org.). *Depois do Grande Encarceramento*, Revan, Rio de Janeiro. 2010. pp.9-28.
- Abramovay, P. V.; Malaguti, V. (org.). *Seminário Depois do Grande Encarceramento*. Rio de Janeiro: Revan. 2010.
- Anitua, Gabriel Ignacio. “A América Latina como instituição de sequestro” En: Abramovay, P. V.; Malaguti, V. (org.). *Depois do Grande Encarceramento*. Revan. Rio de Janeiro. 2010. pp.67-83.

15- Las autoras denuncian como las recientes reformas en la Ley general de la tortura abre lagunas para la ejecución de tales prácticas al condicionar que es considerado tortura abriendo espacio para una distinción entre “torturas y torturitas”.



- Argüello, K. "Estado Social ao Estado Penal: invertendo o discurso da ordem". Primeiro Congresso Paranaense de Criminologia. nov. Londrina. 2005
- Arnaiz, Cruz, Méndez. "Los aprendizajes oaxaqueños en materia de Tortura, en miras a una legislación justa". COMECSO. 2010. pp.752-766.
- Arteaga, N. B. Pobres y delincuentes: Estudio de Sociología y genealogía. México: Porrúa. 2006
- Astorga, Luis. Seguridad, trafica tes y militares: El poder y la sombra. Tiempo de Memórias. México: Turquets. 2007
- Augusto, A. "Para além da prisão-prédio: as periferias como campos de concentração a céu aberto". En: Abramovay, P. V.; Malaguti, V. (org.). Seminário Depois do Grande Encarceramento. Rio de Janeiro: Revan. 2010.
- Carranza, Elias. Cárcel y justicia penal en América Latina y el Caribe. México: Siglo XXI. 2009
- Castel, R. "Los riesgos de exclusión social en un contexto de incertidumbre". En: Revista Internacional de Sociología (RIS). 72 .junio. 2015. pp. 15-24
- Centro de Estudios sobre impunidad y Justicia CESIJ. Índice Global de impunidad IGI. Fundación Universidad de las Américas Puebla. Puebla, México. 2015.
- Colectivo de Análisis de la seguridad con Democracia, Casede (2012). Atlas de la seguridad y la defensa de México. México: Casede. 2012.
- Damián, Araceli. "El discurso de los organismos internacionales en el diseño de la política social para superar la pobreza". En: Giorguli, s. y Ugalde, V (coord.). Gobierno, Territorio y población: las políticas públicas en la mira. El Colégio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. México. 2014. pp.727-761
- De Giorgi, A. A miséria governada através do sistema penal. trad. De Sergio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan. 2006
- Esquivel, H. Desigualdad extrema en México: Concentración del poder económico y político. México: IGUALES, OXFAM. 2015.
- Froylan, E. "Los Fracazos Del Chantaje. Régimen de Prohibición de Drogas y Narcotráfico". En: Alvarado, A.; Serrano, M. (coord.). Los grandes problemas de México. XV. Seguridad Nacional y Seguridad Interior. Colmex, México. 2010.
- International center for Prison Studies, ICPS. Walmsley, R. World "Prison Population List". En: Walmsley, R. World Prison Population List. Tenth Edition. University of Essex. International centre for Prison Studies - ICPS. United Kingdom. 2014
- _____. "Prison Population List". University of Essex, United Kingdom. 2016. Disponible en: <http://www.prisonstudies.org/>.
- _____. "Prison Population List". University of Essex, United Kingdom. 2018. Disponible en: <http://www.prisonstudies.org/>.
- Jacobo Waiselfisz, Julio. Mapa da Violência 2015: Adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil. Brasil: Flacso. 2015.
- Jankovic, Ivan. "Labor market and imprisonment". En: Crime and Social Justice. 8. 1977. pp.17-31.
- Jarroud, M. "No Hope in Sight for Latin America's Prison Crisis". En: Inter Press. 2015. Disponible in: <http://truth-out.org/news/item/28981-no-hope-in-sight-for-latin-america-s-prison-crisis#>. Aceso en: 07 Feb 2015.
- Malaguti, B. V. (org.). Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan Editora. 2012.
- Marx, K. O capital. Crítica da Economia Política. Processo de produção do capital. Os Economistas. volume I. São Paulo: Círculo do Livro. 1996
- Melossi, D. El Estado del control social. España: Siglo Veintiuno editores. 1992



- Moreno-Brid, J. C.; Bosch. Desarrollo y crecimiento en la economía mexicana: Una perspectiva histórica. México: Fondo de Cultura Económica. 2014
- Pavarini, M. Control y Dominación : teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico. México: Siglo Veintiuno ed. 1983
- Piñeyro, J.; L. "Las Fuerzas Armadas Mexicanas en la Seguridad Pública y la Seguridad Nacional". En: Alvarado, A.; Serrano, M (coord). Los grandes problemas de México. Seguridad Nacional y Seguridad Interior. XV Seguridad. v.15. ed. 1. México: El Colegio de México. 2010.
- Pires, A. "A racionalidade penal moderna, o público e os direitos humanos". En: Novos Estudos. nº68. marzo. Brasil: CEBRAP. 2004. pp.39-60
- Ramos, J. M. G. Las Políticas Antidrogas y Comercial de Estados Unidos en La Frontera De Mexico. México: El Colegio De La Frontera Norte. 1995
- Rusche, G., Kirchheimer, O. "Punição e estrutura social". En: Pensamento Criminológico. Instituto Carioca de Criminologia. Ed.2. Rio de Janeiro:Revan. 2004
- Sader, Emir. "Una democracia sin alma social". En: Sader, E. (coord). El ajuste estructural en América Latina: costos sociales y alternativas. Buenos Aires: Clacso. 2001. pp. 137-144
- Sozzo, Máximo. "¿Más allá del Neoliberalismo? Cambio político y penalidad en América del Sur". En: Cuadernos del pensamiento crítico latinoamericano. Mayo, n. 23. Argentina: CLACSO. 2015
- Vázquez Olivera, M. G. El viraje neoliberal de la política social y la búsqueda de alternativas en América Latina". Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México. 2012
- Vite Pérez, M. A. "México, ¿Hacia la consolidación de un modelo de igualdad de oportunidades para una sociedad fragmentada?". En: Perfiles Latinoamericanos (44). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Distrito Federal, México. 2014. pp. 33-57
- Wacquant, L. As prisões da miséria. 2.ed, Zahar, Rio de Janeiro. 2011
- Wacquant, L. "A política punitiva da marginalidade: revisitando a fusão entre "workfare" e "prison-fare". En: Epos. Carlos Jobim, Rio de Janeiro. 2012. pp. 1-28
- _____. [2003]. "Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos". En: Coleção Pensamento Criminológico. n. 3. Revan Editora. Rio de Janeiro. 2013
- Walmsley, Roy. World Prison Population List. Home Office Research, Development And Statistics Directorate Research Findings. No. 88. 1999

